



Observatorio Exterior

Mayo 2015

CHILE

El retorno de la izquierda decepciona



El rotundo triunfo de Michelle Bachelet en la segunda vuelta de las elecciones (legislativas y presidenciales) celebradas en diciembre de 2013 supuso el retorno de la centroizquierda al poder, tras el único gobierno de derecha en 20 años de democracia. La presidenta de la coalición de izquierda “Nueva Mayoría” volvió a hacer historia. Tras convertirse en la primera mujer en alcanzar la Presidencia del país en 2006, en las



pasadas elecciones ha sido la primera mandataria reelegida después de más de 60 años. Además, lo logró con el porcentaje de votos más alto cosechado por ningún presidente desde el retorno de la democracia: el 62% en segunda vuelta. La victoria de Bachelet es el resultado de su capacidad de canalizar el descontento social por la falta de

reflejo del “milagro económico” chileno en el bienestar de la población a través de un programa político que recogió gran parte de las demandas de los movimientos sociales; en especial, un nuevo sistema educativo y una reforma fiscal para acabar con la desigualdad, y una nueva constitución que consagrara un sistema político más representativo.

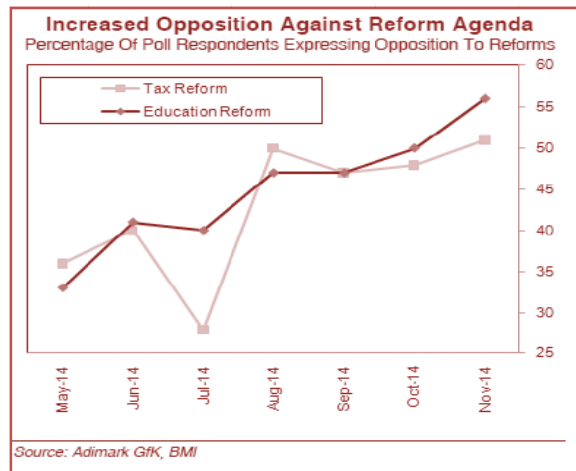
Apenas un año después de su toma de posesión, el 11 de marzo de 2014, los niveles de popularidad de la mandataria se han desplomado: el apoyo a la gestión del gobierno ha bajado de un 50% en julio de 2014 a un 39% en marzo de 2015. Nunca antes había caído Bachelet a niveles tan bajos de popularidad, ni siquiera en los peores momentos de su primera Administración (2006-2010), cuando encaró problemas con los estudiantes y con el transporte público. Las causas son, por una parte, la desaceleración económica (el crecimiento en 2014 se ha reducido a la mitad) y, por otra, la creciente decepción de la ciudadanía con las reformas y planes estructurales del gobierno, a lo que se suman los problemas en los últimos meses en servicios públicos como el metro.

Por si esto fuera poco, los recientes escándalos de corrupción tanto en su partido como en la propia familia de la mandataria han hecho el resto. Los más sonados han sido, en primer lugar, el caso Caval, la empresa de su nuera, que está siendo investigada por posible uso de información privilegiada y tráfico de influencias tras la compraventa de un terreno; esta operación le costó la salida de la dirección sociocultural de la Moneda a su hijo, Sebastián Dávalos, a quien se acusa de utilizar su influencia para cambiar la calificación del terreno, de agrícola a inmobiliario, y así aumentar exponencialmente su valor. A lo anterior se suman los casos Penta y SQM, ambos relacionados. El primero hace referencia a un proceso por delitos tributarios y soborno en el que están involucrados empresarios y políticos. El Grupo Penta, un holding empresarial chileno con inversiones en las áreas de seguros, finanzas, salud, inmobiliaria y educación, habría supuestamente organizado un sistema de financiación irregular a candidatos presidenciales y al Parlamento con el fin de contar con una red de influencias en el Congreso para sacar adelante las iniciativas que les favorecían. Por último, el caso Soquimich o SQM está relacionado también con la financiación ilegal de partidos. Supuestamente el recaudador de la campaña política de la Presidenta Michelle Bachelet y otros funcionarios públicos, tanto del Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014) como del actual, emitieron facturas a la sociedad minera Soquimich sin haber trabajado nunca para ella. El dinero que recibieron a cambio lo entregaron a partidos y dirigentes. Por si estos escándalos no fueran suficiente, a la crisis de popularidad de Bachelet se suman las divisiones dentro del propio oficialismo: los continuos encontronazos en el seno de la Nueva Mayoría entre los democristianos y el ala izquierda de la coalición son tan evidentes que la propia Presidenta ha hecho varios llamamientos a la unidad.



El contexto político no podría ser más complejo de cara a la puesta en práctica del programa político y económico de Bachelet. De los tres pilares de la agenda política de “Nueva Mayoría”, la reforma tributaria, aprobada en septiembre de 2014, ha sido recibida con un rechazo generalizado, por la percepción de que perjudica directamente a la clase media, como han insistido la derecha y el empresariado. Sin embargo, esta reforma es la piedra angular de la agenda política del gobierno, ya que los ingresos obtenidos por el aumento de la carga tributaria (se prevé una recaudación de unos 8.200 mill.\$) permitirán, entre otras cosas, financiar con ingresos permanentes la reforma de la educación, que es el segundo pilar de la agenda del gobierno.

La promesa electoral de lograr un sistema educativo gratuito y de calidad generó altas expectativas, pero la complejidad de la reforma ha retrasado la agenda legislativa. De hecho, el titular de Educación, Nicolás Eyzaguirre, es el ministro peor evaluado del gabinete del gobierno. El primer proyecto de ley, que fue aprobado en enero de 2015 y entrará en vigor en 2016, contempla cambios en la educación primaria. Por un lado, garantiza la educación gratuita, al eliminar gradualmente los copagos en los colegios subvencionados (que pasarán a ser financiados por el Estado). También prohíbe que las instituciones educativas que reciben financiación pública apliquen mecanismos de selección de estudiantes, para evitar discriminaciones. Todos los establecimientos que reciban algún tipo de aporte del Estado deben destinar esos recursos a mejorar la calidad y, en un plazo de tres años, se transformarán en corporaciones o fundaciones sin fines de lucro. La gratuidad de la enseñanza universitaria se deja para una segunda fase de la reforma, lo que ha provocado que el movimiento estudiantil la tache de insuficiente.



El tercer pilar del programa electoral era la aprobación de una nueva Constitución, "que se haga cargo de los cambios" de las últimas décadas, que refleje "el Chile de hoy" y que establezca "una nueva relación entre el Estado y los ciudadanos". El objetivo es borrar lo que sobrevive de la dictadura militar, en especial el llamado sistema de elección binominal. Esta fórmula electoral, instaurada en 1980 por Pinochet, difumina las diferencias entre el primer y el segundo clasificado en las elecciones, y beneficia fuertemente a la primera minoría del país, ya que el partido ganador debe duplicar los votos de la segunda fuerza para lograr el segundo escaño en cada uno de los distritos electorales, y el resto de las minorías quedan excluidas. Este método posibilitó durante los casi 25 años de democracia la consolidación de dos grandes alianzas políticas, limitando el acceso de los

partidos más pequeños y los independientes al Congreso. En enero de 2015 se aprobó la reforma, que instaura a un nuevo sistema electoral con carácter proporcional, lo que dará indudablemente más opciones a terceras fuerzas. La nueva ley electoral, además, aumenta el número de diputados de 120 a 155, mientras que los senadores pasarán de 38 a 50, y establece que al menos el 40% de los candidatos deben ser mujeres.

Por último, se está tramitando el proyecto de ley de la reforma laboral, en el que destaca el fortalecimiento de la negociación colectiva y la prohibición de reemplazar a los trabajadores en caso de huelga. La oposición y los empresarios señalan que la reforma tendrá un impacto negativo en la creación de empleo, sobre todo en un escenario de desaceleración económica. Empresas como BHP Billiton, Rio Tinto y Anglo American han manifestado su preocupación por el posible aumento de los costes laborales y el riesgo de que se incentive la huelga, y consideran que desincentivaré la inversión y puede afectar al atractivo ambiente de negocios de Chile, al que tanto debe el éxito económico del país.

Afectada por los escándalos que han deteriorado la confianza de los ciudadanos y expuesta al desgaste político por acometer reformas de gran calado, la presidenta Michelle Bachelet afronta actualmente el momento más difícil de sus dos mandatos. Los problemas se le acumulan: a la crisis política se suma la desaceleración económica, producto, en gran medida, de la caída del precio del cobre. En 2014 Chile ha registrado el menor crecimiento del último lustro (1,9%, frente a un promedio del 5,6% entre 2010 y 2012). Las autoridades económicas han reaccionado muy bien en el pasado (sin duda mejor que sus homólogos en otras regiones) ante los shocks externos, con lo que es previsible que ante este escenario apliquen adecuadas políticas contracíclicas, para las que aún disponen de margen, tal y como ya lo están haciendo a día de hoy. Las previsiones recogen esta confianza en la capacidad del



ejecutivo de manejar la situación económica y barajan un crecimiento entre el 2,5% y el 3,5%. Manejar el escándalo político será, sin duda, más complejo, pero es imprescindible para que la puesta en práctica de la agenda reformista pueda acometerse con garantías de éxito.